

COMPLEJO PORTUARIO EUROAMERICA S.A. C/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE Y
OTRO s/ medida cautelar.



LAURA
MERCED
ES Monti

Firmado
digitalmente por
LAURA
MERCEDES Monti
Fecha: 2022.07.14
18:27:24 -03'00'

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

- I -

COMPLEJO PORTUARIO EUROAMÉRICA S.A. -en expediente digital- solicita a V.E. el dictado de una medida cautelar anticipada urgente, *inaudita parte*, en los términos de los arts. 230, 232 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a fin de que esta última se abstenga de ejecutar el incremento extraordinario del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB), dispuesto por el art. 123 de la ley provincial 15.311 y sus normas complementarias y reglamentarias, incluyendo pero no limitado a las resoluciones normativas ARBA 31/2020 Y 43/2021, todo ello por instaurar un derecho aduanero en violación a los arts. 4°, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 26, 28, 31, 75 incs. 1°, 7°, 10, 13 y 18, y 126 de la Constitución Nacional a las normas de la Ley Federal de Puertos 24.093 y la Ley de Navegación y Comercio de Cabotaje Nacional (decreto ley 19.492/44).

Pone de manifiesto que está legitimada para solicitar esta cautelar por resultar obligada al pago del Incremento, al hallarse inscripta en los códigos de Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB18) mencionados en el art. 123 de la ley 15.311, toda vez que explota un puerto ubicado en la Provincia de Buenos Aires, realizando actividades de carga, descarga y removido de mercadería.

Asevera que el contenido estrictamente federal de la medida cautelar que solicita se sustenta en que: (i) se discute la extralimitación de la Provincia de Buenos Aires al invadir competencia exclusiva del Gobierno Federal según lo establece la Constitución Nacional, lo que surte la competencia de la justicia nacional según lo dispuesto en los arts. 2° inc. 1° de la ley 48 y 116 de la Ley Fundamental; (ii) la cuestión aquí planteada no exige el análisis del art. 123 de la ley impositiva local o de sus normas reglamentarias, ni existe incertidumbre alguna acerca de los sujetos pasivos, ni sobre los elementos constitutivos del hecho imponible del Incremento, ni cuestión alguna que requiera el examen de normas locales. Expone que tampoco se trata de un fundamento mixto (federal y local) ni se invoca norma local alguna contra la cual colisione el Incremento; (iii) el único y exclusivo objeto de lo pretendido es la manifiesta inconstitucionalidad de la ley impositiva 2022 en tanto establece un tributo que opera en los hechos como un verdadero derecho aduanero provincial sobre las mercaderías que ingresan y egresan a través de las terminales portuarias ubicadas en puertos de la Provincia, así como a su transporte y circulación interjurisdiccional que esta última se encuentra vedada de establecer por expreso mandato constitucional (arts. 4° y 75 incs. 1° y 13 de la Constitución Nacional) y en abierta colisión con los arts. 9°, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 26, 28, 31, 75 incs. 1°, 7°, 10 y 18, y 126 de la Ley Fundamental) y con el Régimen Federal de Puertos (ley 24.093 y su reglamentación) y la Ley de Navegación y Comercio de Cabotaje Nacional (decreto ley 19.492/44). En ese sentido, manifiesta que la medida anticipada que solicita, aun cuando se dirige contra una norma local, su



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

pretensión se circunscribe directa y exclusivamente a la interpretación y aplicación de la normativa federal invocada y su violación por parte de las disposiciones locales, por lo cual entiende que la cuestión federal es predominante y excluyente en la causa.

- II -

En ese estado, se corre vista a este Ministerio Público por la competencia.

- III -

Cabe recordar que el Tribunal tiene dicho en reiterados precedentes que no basta con que una provincia sea parte en un pleito para que proceda la competencia originaria de la Corte, ya que resulta necesario, además, examinar la materia sobre la que versa, esto es que ella sea de manifiesto contenido federal (Fallos: 311:1812 y 2154; 313:98 y 548; 315:448; 318:992 y 2457; 322:1470; 323:2380 y 3279) es decir, que la demanda entablada se funde directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 323:2380 y 3279).

Esta hipótesis, en la que procede la justicia federal en razón de la materia (conf. art. 116 de la Ley Fundamental), lleva el propósito de afirmar las atribuciones del Gobierno

Federal en las causas relacionadas con la Constitución, los tratados y las leyes nacionales así como las concernientes a almirantazgo y jurisdicción marítima (Fallos: 310:136; 311:489, entre otros).

A mi modo de ver, en el *sub lite*, el planteamiento que efectúa la parte actora reviste un manifiesto contenido federal y, por ende, es apto para surtir la competencia originaria de la Corte, pues según se desprende de los términos del escrito introductorio -a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, según los arts. 4° y 5° del C.P.C.C.N. (Fallos: 339:1033 y 340:815)-, la actora, mediante la medida cautelar anticipatoria planteada solicita que la las demandadas se abstengan de aplicar diversas disposiciones locales (art. 123 de la ley provincial 15.311 y sus normas complementarias y reglamentarias, y las resoluciones normativas ARBA 31/2020 y 43/2021) por entender que son contrarias, en forma directa, a la Constitución Nacional en cuanto afectan facultades exclusivas del Congreso Nacional en materia de aduana, comercio interjurisdiccional, importación y exportación de mercadería (arts. 4°, 9°, 10, 11, 14, 17, 28, 31, 33 y 75 incs. 1° y 13, y 126), colisionar con la jurisdicción nacional en materia de actividades portuarias, el Régimen Federal de Puertos (ley 24.093 y su reglamentación) y la Ley de Navegación y Comercio de Cabotaje Nacional (decreto ley 19.492/44).

En tales condiciones, advierto que, aun cuando el planteo de la actora se dirige al cuestionamiento de normas locales, lo medular de él, remite necesariamente a dilucidar si lo legislado por la autoridad local interfiere en un ámbito que



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

es propio de la Nación, llevando a desentrañar el sentido y los alcances de los referidos preceptos federales, cuya adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución de la controversia y permitirá apreciar si existe la mentada violación constitucional (Fallos: 311:2154, cons. 4º; 326:880, entre otros).

Así las cosas, desde mi punto de vista, considero que la causa se encuentra entre las especialmente regidas por la Ley Fundamental, a las que alude el art. 2º, inc. 1º de la ley 48, en tanto versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre los poderes del Gobierno Federal y los de una provincia, lo que hace competente a la justicia nacional para entender en ella (Fallos: 315:1479; 333:60, entre muchos otros).

Asimismo, corresponde tener en cuenta que este Ministerio Público se ha expedido por la competencia originaria de V.E. en casos análogos a éste, como los tramitados en los expedientes CSJ 332/2020 "DELTA DOCK S.A. c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ acción declarativa de certeza"; FBB 8631/2020/CS1 "TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. c/ PCIA. DE BUENOS AIRES s/ medida cautelar" (conf. dictámenes en esas causas del 28 de septiembre de 2020); CSJ 1765/2020 "TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A. c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ acción declarativa (art. 322 Cód. Procesal), dictamen del 13 de junio de 2021 y más recientemente en las actuaciones FSM 13120/2021/CS1 "VITCO S.R.L. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ medida cautelar" y FSM 13104/2021/CS1 "COMPLEJO PORTUARIO

EUROAMÉRICA S.A. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO s/ medida cautelar”, ambos dictámenes del 17 de noviembre de 2021.

- IV -

En atención a lo expuesto, al ser parte una Provincia en un pleito de naturaleza federal, considero que –cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de la actora (Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716, entre otros)– el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte.

Buenos Aires, de julio de 2022.